



La reconfiguración de la confrontación armada a
favor del Estado

Paola Santos Páramo

Trabajo de grado para optar al título profesional:
Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C., Colombia

2014

MSU
327.17
S157
EJ.3

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y DEFENSA
NACIONALES

Plan Colombia:

la reconfiguración de la confrontación armada a favor del
Estado

PAOLA SANTOS PÁRAMO

MONOGRAFÍA DE GRADO

TUTOR: HUMBERTO ALARCÓN

JULIO DE 2014

ÍNDICE

Introducción

Desarrollo de contenido

Capítulo I: La composición de una amenaza: las Farc y el 'Plan Estratégico para la Toma del Poder'.

Capítulo II: La pugna Estado-Farc: El avance ilegal hacia un 'Estado fallido'.

Capítulo III: Plan Colombia, *US aid package* e la IRA: elementos para el viraje de la confrontación armada a favor del Estado.

Capítulo IV: Asegurando la debilidad militar de las Farc: el Plan Colombia II y éxitos operacionales de las Fuerzas Militares.

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias

Introducción

En la historia de Colombia, las autodenominadas Farc se han consolidado como una amenaza a la Seguridad Nacional. Aunque Terry L. Deibel (2007) definió las amenazas como un agente externo al Estado que atenta contra los intereses nacionales, desde su nacimiento las Farc tuvieron un desarrollo tal, que se han convertido en un obstáculo para la realización de las aspiraciones sociales como el bienestar.

En la actualidad, cuando la organización esta *ad portas* de cumplir cincuenta años de existencia y la amenaza parece mantenerse, sigue siendo necesario analizar el transcurrir de la misma, así como la respuesta del Estado a lo largo de la última mitad de siglo. La comprensión del fenómeno en su integridad es imperante para el proceso de toma de decisiones de alta política y la consecuente conducción del aún complejo escenario de seguridad.

En este imperativo muchos trabajos académicos se han enfocado en el desenvolvimiento interno del flagelo a partir de los dos actores en disputa: el Estado y la organización armada ilegal. Pero para entender realmente la definición y el transcurrir del problema doméstico al que se hace referencia, también resulta pertinente profundizar el impacto que han tenido otros factores que intervienen en el mismo, como lo ha sido la injerencia de actores externos, especialmente de los Estados Unidos.

Uno de los asuntos que más ha resaltado como muestra de la influencia de otros actores en el contexto interno, es el proceso de formulación y ejecución de lo que se conoce como el Plan Colombia. Una estrategia desarrollada por el Gobierno Colombiano y apoyada por la administración estadounidense, que en un primer momento pretendía contrarrestar el asunto del tráfico de drogas ilícitas, pero que

terminó aportando en gran manera a la lucha estatal contra las organizaciones armadas ilegales como las Farc.

Es precisamente éste el tema central que el presente trabajo pretende abordar. La idea central que se pretende defender es que si bien el Plan Colombia ha sido criticado como un elemento de subordinación ante los intereses de Estados Unidos, en realidad el Plan se convirtió en la estrategia más efectiva para neutralizar la avanzada de las Farc desde lo financiero y militar.

Para abordar este planteamiento, cuatro serán los puntos a tratar a lo largo de este escrito: El primero pretende mostrar cómo la incompreensión del fenómeno armado ilegal por parte de los dirigentes nacionales permitió que las Farc pasaran de un grupo pequeño y con baja capacidad de acción, a un actor de gran escala. Como resultado la organización se consolidó como una real amenaza para el Estado.

En el segundo punto se abordará que, como consecuencia de lo anterior, la respuesta del Estado a través de la Fuerzas Militares se enmarcó en la lógica de la Guerra Fría que redujo la actuación estatal a una estrategia de contención militar. Como resultado se permitió la avanzada de las Farc y se llevó al Estado a ser caracterizado como un Estado Fallido.

No fue hasta la generación del Plan Colombia que cambió la estrategia del Estado, al entenderse las Farc como un fenómeno integral que se alimentaba no sólo del aspecto militar sino también al aspecto financiero derivado del tráfico de drogas. El Plan Colombia trajo consigo un fuerte componente antinarcótico y condujo a la modernización de las Fuerzas Militares. Así, además de una lógica de contención, se adecuó una estrategia de negación que permitió una eventual afectación del componente financiero del grupo ilegal. Este será el tema del tercer capítulo.

Finalmente, el cuarto capítulo mostrará que la profesionalización de las Fuerzas Militares vinculada al Plan Colombia, permitió la reconfiguración del escenario armado a favor del Estado, debido a que las Fuerzas Militares retomaron la iniciativa armada y generaron el repliegue estratégico de las Farc.

Con este trabajo se espera encontrar elementos que puedan contribuir a futuros diseños y planes de cooperación, así como mejoras en la tendencia militar y estratégica de las Fuerzas Militares de Colombia.

Capítulo I.

La composición de una amenaza: las Farc y el ‘Plan Estratégico para la Toma del Poder’.

Como se mencionó en la introducción, las autodenominadas Farc se han consolidado como una amenaza a la seguridad nacional. Pasaron de ser un grupo de autodefensas liberales a uno de los grupos armados ilegales más antiguos y significativos del país. Pero ¿cómo se configuró este fenómeno en un Estado que se ha considerado como una de las democracias más estables de América Latina? Esta cuestión es la que el presente capítulo pretende abordar.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- están *ad portas* de cumplir 50 años de existencia. Desde la operación Marquetalia que adelantó el Ejército Nacional para contrarrestar las acciones que estaban atentando contra la integridad territorial del Estado, las Farc surgieron como un grupo ilegal que, en la retórica del momento, pretendía reivindicar demandas sociales a través de la lucha armada consecuente de las épocas previas de violencia bipartidista que dieron lugar a la conformación de las guerrillas liberales en los inicios del Siglo XX.

Hoy en día, después del paso de muchas administraciones nacionales y políticas gubernamentales que de una u otra forma buscaron darle algún tipo de manejo al fenómeno de guerra interna, las Farc persisten como organización al margen de la ley, continúan con su dialéctica de demandas sociales y adelantan acciones para la modificación estructural de las instituciones estatales de acuerdo a su propia visión política poco entendida y legítima.

No obstante, el recorrido desde sus inicios hasta la actualidad trajo consigo grandes cambios que permiten marcar etapas de transición y transformación del grupo y que permiten analizar desde una perspectiva rigurosa, el fundamento que presentan como su razón de ser.

Un primer momento se establece entre 1964-1978 y se puede entender como lo que Román Ortíz (Ortíz, 2006) califica de "una guerrilla sin guerra". Una etapa en la que las Farc no contaban con real capacidad militar ni logística para hacer la guerra y actuaban en un marco de defensa y supervivencia. Gutiérrez Sanín explica muy bien esta época al afirmar que "al inicio de los años sesenta (las Farc) se volvió una organización de autodefensas campesinas con presencia en unas cuantas regiones pequeñas y aisladas. Aunque el bombardeo a Marquetalia le dio cierta notoriedad, tuvo largos periodos de 'sumergimiento' total en su proceso de acumulación de fuerzas" (Sanín, 2004, pág. 45).

Posteriormente, desde 1978 se plantea un punto de inflexión para las Farc al pasar de una "guerrilla sin guerra" a una organización centrada en la búsqueda y consolidación de fuentes de financiamiento, al mismo tiempo que incluían temas urbanos y de reivindicación social en el discurso con el que pretendían legitimarse. El papel preponderante que desde finales de los setenta obtuvo el narcotráfico permitió que se profundizara la violencia y la lucha por el dominio territorial; "el narcotráfico terminó desplazando a las élites regionales y llevando a cabo una política de consolidación como nuevos actores sociales, determinantes de nuevos procesos de tenencia de la tierra, violencia y desarrollo de una economía ilícita" (Patiño, 2010, pág. 192)

Finalmente, la llegada de la década de los 1980 trajo consigo un cambio que sin duda implicó el viraje en la forma de actuar y de proyectarse de las autodenominadas Farc. La realización de la 7ª Conferencia Nacional Guerrillera, llevada a cabo entre el 4 y el 14 de mayo de 1982, fue un hito para la organización al plantear la necesidad de transformarse en movimiento ofensivo con capacidad de emprender acciones de ataque tendientes a debilitar a las fuerzas del Estado.

Como lo describen sus estatutos, a partir de la 7ª Conferencia se formularon los fundamentos ideológicos de las Farc-EP, se definió su estructura orgánica, el régimen de comando y lo que conocen como las Normas Internas de Comando en las que se trata lo habitual en el ejercicio diario de diversas unidades, incluidas las denominadas unidades tácticas de combate (Farc-EP, 2014). Bajo este precepto, las Farc se establecieron como un ejército (de ahí la inclusión de las siglas EP -ejército del pueblo-) y se planteó la ofensiva de comandos móviles.

Se dice, entonces, que la 7ª Conferencia fue un hito o punto de inflexión porque fue el inicio de lo que se conocería más adelante como el ‘Plan Estratégico para la Toma del Poder’: Una estrategia diseñada por los cabecillas de la organización armada para avanzar militar y políticamente en el objetivo de coaccionar la institucionalidad del Estado e imponer un sistema marxista vinculado a la nueva corriente del Socialismo del Siglo XXI que ha tenido acogida en algunos países de América Latina.

De acuerdo con Hernando Ortiz Rodríguez (2009), el Plan Estratégico se sustenta en tres pilares básicos: el primero es la acumulación de medios y recursos como dinero, comunicaciones, reclutamiento, entre otros. El segundo es el control tanto de la organización en lo que a mando y coordinación respecta, como del territorio a través de las milicias. El tercero es un elemento de maniobra que enmarca los aspectos

políticos y militares que les permitirán avanzar en la consecución de su fin último (Rodríguez, 2009).

En otras palabras, el Plan contempla componentes de carácter financiero, militar y político que se integran en una hoja de ruta implementada para “conformar a la organización en una máquina capaz de enfrentar y derrotar al Estado sin límites de tiempo o plazos previamente fijos, por medio de acciones (...) desarrolladas por fases” (Rodríguez, 2009, pág. 170). Los tres aspectos se analizarán a continuación.

En relación al plan armado, en la 7ª Conferencia el secretariado de las Farc dispuso que alias ‘Mono Jojoy’ y alias ‘Tirofijo’ se encargarían de dirigir el programa del crecimiento armado enfocado a establecer 36000 hombres sobre la cordillera oriental para lanzar la ofensiva final sobre la capital del país (Villamarín, 2011). Para esto, se desarrollaron cursos de entrenamiento en guerra de guerrillas y en terrorismo, al mismo tiempo que se adoctrinaba a los integrantes de la organización en tácticas de reclutamiento y en otros puntos del plan Estratégico.

En este escenario militar (importante porque en éste se ha desarrollado en gran parte la guerra contra las Farc), la nueva estrategia definió que las Farc entraran en la dinámica de lo que se conoce como ‘Guerra Popular Prolongada’-GPP-. Este esquema de guerra concebida por Mao Tse Tung -máximo dirigente del Partido Comunista de China-, plantea un proceso progresivo para asumir un enfrentamiento bélico de carácter asimétrico, el cual inicia con la táctica de guerra de guerrillas y termina con la toma del poder, pasando por la guerra de movimientos y la guerra de posiciones.

De esta forma quedó definida la acción táctica de la avanzada guerrillera dirigida al fin estratégico de la toma del poder.

La gráfica siguiente ayuda a ilustrar esta idea:



Fuente: Rodríguez, 2009

Según el esquema en mención, las Farc aplicarían la táctica de crecimiento, acumulación y pequeñas acciones. De esta forma, ante el enfrentamiento que se enmarcaba en una disparidad negativa de fuerzas con el adversario, la guerra de guerrillas, sustentada en una defensiva estratégica, conllevaría al hostigamiento del enemigo en su propio territorio, con destacamentos irregulares y mediante ataques rápidos y sorpresivos.

Una vez se hubiesen logrado avanzar en la táctica de guerrilla y se hubiera logrado acumular fuerza y recursos, la segunda estación sería la guerra de movimientos. En esta etapa, siendo la organización más sólida, se debería avanzar hacia un equilibrio estratégico con el oponente a través de una escalada en la intensidad de los ataques y una ofensiva más decisiva sobre las instituciones del Estado. La guerra de movimientos implicaría entonces una vinculación de las masas y aumento en la concentración y en la movilidad, lo que a su vez permitiría golpear constantemente al adversario. Se empiezan a tomar y defender posiciones fijas de manera temporal.

Al consolidar un escenario de equilibrio con el enemigo, la GPP señalaría el paso de la similitud de condiciones a la ofensiva estratégica. Se daría inicio a la guerra de posiciones que tendría como objetivo controlar los centros administrativos y políticos del Estado, desbordar la capacidad del gobierno y las fuerzas de seguridad legítimas, y controlar al país. Para esto, se incrementan los enfrentamientos directos y la cantidad de contingentes desplegados en un escenario que se asemeja más a un combate convencional.

Todo el proceso anterior conduciría paulatinamente a un debilitamiento integral del aparato estatal y al eventual alcance del poder político a partir de la supremacía militar por parte de las Farc.

Alfredo Rangel (2003) expone esta tendencia en el marco de acción de las Farc al decir que

“las Farc tienen como consigna para sus frentes el no dar, no hacer combates abiertos con el Ejército, sobre todo en esas zonas planas y llanas del país muy destapadas, mientras no tengan capacidad de contrarrestar esa ventaja aérea. Es decir, mientras no tengan una capacidad suficiente de misiles que les permitan, insisto, neutralizar esa ventaja aérea de las Fuerzas Militares. Pero aquí hay que decir que siendo esa la pretensión, el propósito fundamental y la estrategia fundamental de la guerrilla, por lo menos de las FARC (...) es continuar con un proyecto de guerra popular prolongada al estilo clásico del maoísmo.

Y este no fue un esquema que haya surgido deliberadamente. Es una guerrilla que ha estado mucho más cerca al Partido Comunista, pro moscovita, no de origen maoísta. Pero en el desarrollo mismo de toda su estrategia, ha seguido todas y cada una de las fases de surgimiento, de consolidación, de expansión y de fortalecimiento de una guerrilla clásica que desarrolla una estrategia de guerra popular y prolongada. Creo que

esa sigue siendo la naturaleza principal, la dinámica principal de ese grupo insurgente, y por ello me parece que el escenario principal de la confrontación con este grupo (...) sigue siendo en términos políticos y militares, esencialmente” (Rangel, 2003, pág. 64).

Frente al segundo aspecto del Plan Estratégico, el político, los encargados de dirigir el plano político serían alias ‘Alfonso Cano’, alias ‘Timochenko’, alias ‘Iván Marquez’ y alias ‘Raul Reyes’. En este aspecto, la estrategia estaría concentrada en aspectos publicitarios, acciones de guerra psicológica y difusión propagandística en el exterior encabezada por el frente internacional (Villamarín, 2011).

Estas acciones fueron ejecutadas por las Farc en escenarios de promoción de derechos sociales y derechos humanos como los europeos. En estos, implementaron el discurso de las causas objetivas de la guerra y de la inatención del Estado ante las necesidades básicas de la población, para poder legitimar su actuar ante organizaciones no gubernamentales que terminaron por darles su apoyo.

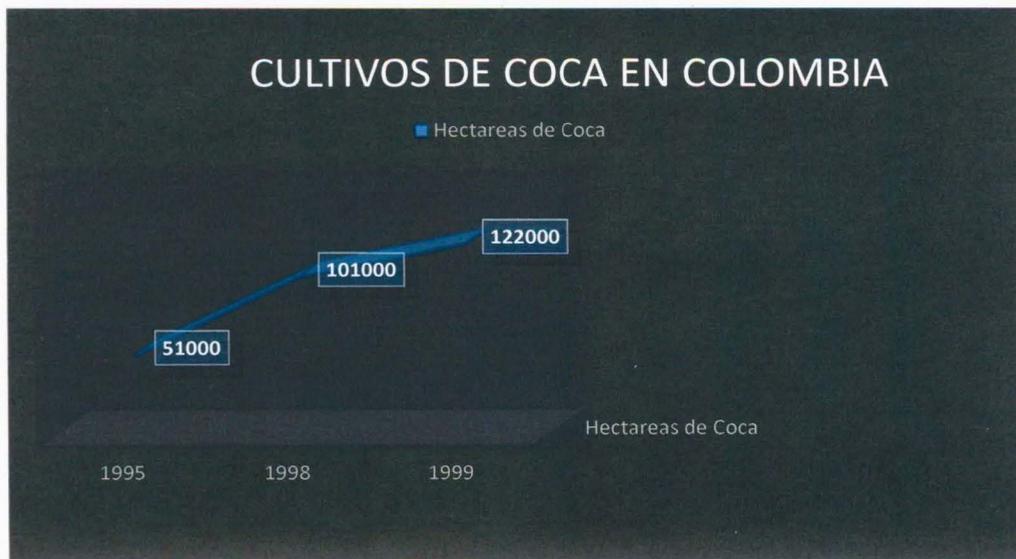
Finalmente, en relación al tercer pilar del Plan Estratégico, el financiero, todos los miembros del secretariado deberían ejercer presión constante sobre las cuadrillas ubicadas en áreas aledañas a sus sitios de operación, con el propósito compartido de aumentar los ingresos derivados del narcotráfico, las extorsiones, el lavado de activos, entre otros (Villamarín, 2011). Sobre estos esfuerzos se mantenía el avance de las acciones en lo militar y en lo político.

En este asunto habría que traer a colación que el papel preponderante que desde finales de los setenta obtuvo el narcotráfico permitió que se profundizara la violencia y la lucha por el dominio territorial. "El narcotráfico terminó desplazando a las élites regionales y llevando a cabo una política de consolidación como nuevos actores

sociales, determinantes de nuevos procesos de tenencia de la tierra, violencia y desarrollo de una economía ilícita" (Patiño, 2010, pág. 192).

La guerrilla aprovechó este auge y se combinó con grupos mafiosos dedicados a actividades ilícitas lucrativas (Patiño, 2010) para la consecución de recursos financieros propios que le permitieran adelantar una guerra revolucionaria de amplia magnitud (Vargas, 2010). Esto dio paso al apogeo de la economía cocalera en la que las Farc se inmiscuirían ampliamente a mediados de los años ochenta.

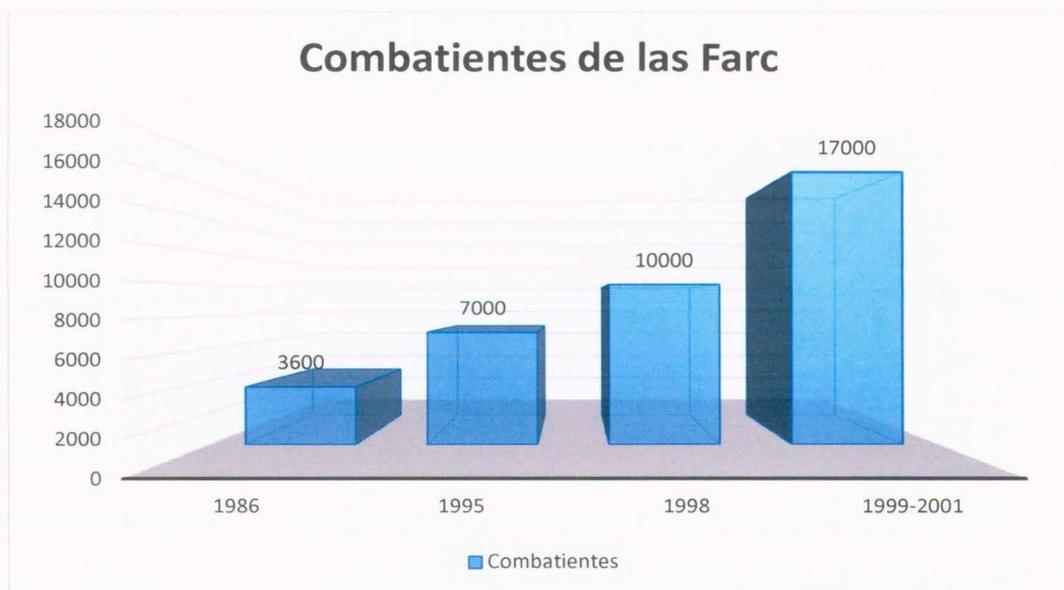
De hecho el auge del negocio de las drogas ilícitas posicionó a Colombia como el primer productor de hoja de coca a mediados de los años 90's (Deshazo, Primiani, & McLean, 2007). La habilidad de los actores inmiscuidos en el negocio para disminuir riesgos, junto con la efectividad de las políticas antidrogas llevadas a cabo en Perú y Bolivia, fueron factores que incidieron en el aumento del número de cultivos de coca en el país durante los últimos años de la década (DeShazo, Primiani, & McLean, 2007). La siguiente gráfica ilustra este hecho:



Fuente: Elaboración propia con datos de Deshazo & MacLea (2007)

El aumento de la producción de coca vino ligado a un cambio significativo en las finanzas de los grupos armados ilegales, principalmente las Farc. Según estimaciones del Gobierno de los Estados Unidos, el negocio del narcotráfico representaba anualmente ingresos de alrededor de 4 mil millones de dólares (el 5% del PIB del país para la época) (DeShazo, Primiani, & McLean, 2007), enriqueciendo tanto a bandas delincuenciales como a la guerrilla que se había consolidado como el tercer cartel del narcotráfico.

Como consecuencia directa de las oportunidades económicas que supuso el negocio ilegal de las drogas, el número de miembros de las Farc creció sustancialmente. De 3600 integrantes a mediados de los años 80's, aumentó a 17000 entre 1999 y 2001. Así mismo, de 32 frentes que tenían las Farc como parte de su división armada, alcanzaron un número de 60 frentes para el año de 1995. Cifras que representan un crecimiento del 472% en el componente humano de las Farc en 15 años, siendo el periodo entre 1995 a 2001 el más significativo.



Fuente: Elaboración Propia con datos de DeShazo, Primiani & McLean (2007)

En suma, los años 90's se consagraron la estructura general sobre la que las Farc avanzarían en una guerra total contra el Estado, en un Plan que había definido roles, campos de acción, escenarios de confrontación y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Estos planteamientos se constituyeron como la columna vertebral de las decisiones del grupo durante la última década del siglo XX y la primera del siglo inmediatamente siguiente, en las que se dedicaron a acaparar recursos, desestabilizar a las Fuerzas Militares y controlar territorios donde la presencia de la institucionalidad era cuestionable.

Estos asuntos se consolidaron paulatinamente durante la última década del Siglo XX y permitieron un avance significativo de la organización ilegal en su propósito de la reestructuración del Estado. Un propósito que representaba un evidente desafío para la seguridad y terminó configurándose como una amenaza permanente a la misma.

Capítulo II.

El Estado ante las Farc: Contención hacia un 'Estado Fallido'

Ante la acción de la guerrilla, la reacción del Estado fue algo incipiente, a lo que se le imputa el crecimiento posterior de la organización ilegal. Las Farc se entendieron como un problema de carácter militar y no como un fenómeno político integral. En consecuencia, la respuesta de las Fuerzas Militares, a quienes se les atribuyó la competencia única y casi exclusiva de combatir la insurgencia, fue parte de una estrategia poco clara y poco contundente que demostró el poco entendimiento que se tenía del enemigo (Borrero, 2006).

Dos factores incidieron en la incompreensión de la amenaza existente: el marco internacional de la Guerra Fría y el contexto interno del Frente Nacional. Con relación al marco internacional, la Guerra Fría fue el referente internacional evidente que afectó el enfoque asumido por el Ejército para combatir a las Farc. El enfrentamiento bipolar que tenía como centro de disputa cuestiones de carácter ideológico, planteó la lógica que reducía la disputa interna a la dicotomía amigo-enemigo.

De esta forma, como lo explica Armando Borrero (2006) tanto los actores insurgentes como el Ejército se vieron asociados a los actores de la Guerra Fría y el Estado se vio permeado por una visión 'sobreideologizada' consecuente a la disputa entre capitalismo y comunismo (Borrero, 2006).

Por su puesto que la visión que permeo a Colombia fue la de los Estados Unidos que lideraba el bloque capitalista. De esta forma, no sólo la visión occidental influyó el entendimiento de los grupos armados ilegales, sino que también llevó a la asimilación de la estrategia propia de la ruta de acción contra el comunismo: La Contención.

La Estrategia de Contención fue formulada por George Kennan (Kennan, 1947) quien se desempeñaba como Embajador de los EEUU en la URSS. Ante su estudio de la conducta soviética y su conclusión sobre las intenciones de quien lideraba el bloque comunista, escribió el conocido Telegrama X en el que sentaba las bases de la actuación de Washington ante la amenaza latente. Según Kennan, Estados Unidos debía contener la expansión de la URSS en el 'mundo libre' y para esto, debería atacar los centros militares e industriales del enemigo para contrarrestar sus propósitos políticos y económicos.

Pese a su aparente integralidad, la materialización de esta estrategia se dio con la Directiva de Seguridad Nacional 68 ejecutada, que asumió una visión de carácter estrictamente militar. Siendo América Latina parte de la periferia en la confrontación entre bloques, la estrategia permeó la doctrina militar colombiana que se vio influida por una visión de guerra convencional propia del enfoque de contención del enemigo.

En este sentido, el Ejército estaba para contener el avance de las organizaciones catalogadas como comunistas, dentro de las que se había incluido a las Farc, lejos de generar un ambiente de análisis asertivo de las mismas. De esta forma, la injerencia de aspectos exógenos supuso una dificultad en la modernización del Ejército (y en general de las Fuerzas) y para el eventual fortalecimiento del aparato militar del Estado.

Por otra parte, con relación al segundo factor, el marco de Guerra Fría se alimentó con la percepción endógena del papel que debía asumir el Ejército con relación a la situación política y social interna del país. El contexto del Frente Nacional permitió que en el aspecto doméstico se consolidara la subordinación del poder militar al civil que en el momento estaba en manos de élites excluyentes.

Este hecho implicó que, además de la lógica de contención del enemigo comunista propia de la influencia externa, el Ejército asumiera la responsabilidad del mantenimiento del orden público en el territorio nacional (Borrero, 2006). Se dispuso que ante cualquier conflicto social el Estado respondería con coerción y represión utilizando a las FFMM a través de la aplicación de las calidades constitucionales de Estado de Sitio y Estado de Excepción, convertidos en el marco de acción del Ejército. En este escenario, las relaciones cívico-militares eran de carácter instrumental y la fractura entre los militares y la sociedad civil fortaleció el discurso que soportaba la facción política de la guerrilla.

Con el fin de la Guerra Fría llegó un nuevo periodo de transición que supuso nuevos desafíos en el desempeño de las Fuerzas Militares, el Ejército en particular. No solo se perdió el referente internacional del conflicto, sino que se asumieron los efectos de la crisis del Frente Nacional. Se profundizó entonces la incomprensión del carácter de la guerra y se abrió la oportunidad para que el creciente fenómeno del narcotráfico se articulara con la ilegalidad armada, pasando consecuentemente de una guerrilla de actores armados pobres a un actor con dinero.

Una gran consecuencia de este nuevo marco de conflicto fue el avance de las Farc en un marco de guerra total contra el Estado (es decir de destrucción total con el fin de tomarse el poder e instaurar un nuevo orden), mientras que las FFMM seguían despolitizando al enemigo y manteniendo la estrategia de contención sin percibir los retos que imponía el adversario en todos los aspectos (Borrero, 2006). Lo más significativo de este escenario fue que la lucha contra el narcotráfico se mantenía como un aspecto aparte que el Estado asumía dentro de una guerra limitada.

En síntesis, se evidenció en mal manejo que el Estado le dio al surgimiento de la amenaza Farc, que se formaba bajo lo militar, político y financiero. Por un lado, la aplicación irrestricta de la estrategia de contención afectó la adecuación militar asertiva del Estado para contrarrestar a la guerrilla. Se evidenció un gran problema técnico, táctico y operativo por parte del Ejército porque no se actuaba en correlación a una guerra irregular en la que las Farc parecían integrar los elementos de carácter miliar, político y financiero, sino que se actuaba en una lógica de contención; había pérdida de control territorial, una estructura de mandos fijos con poca capacidad de iniciativa militar y una consecuente crisis del modelo militar.

Sumado a lo anterior, la asignación de responsabilidades de orden público a las Fuerzas Militares en un escenario de exclusión política como el Frente Nacional, supuso una afectación a la legitimidad de las instituciones del Estado, en especial de la castrense, que permitió el fortalecimiento del discurso político de las Farc.

Finalmente, la incomprensión del escenario de seguridad que se profundizó con la pérdida del referente internacional (la Guerra Fría), dio paso a que la organización ilegal se vinculara con el negocio del narcotráfico y solidificara su estructura financiera. Así, mientras el Estado flaqueaba en la aplicación de una estrategia propia que realmente respondiera a la amenaza armada, las Farc avanzaban en la consecución de su Plan Estratégico contra el mismo Estado.

De hecho, la guerrilla supo aprovechar el vacío estratégico y a finales de la década de los ochenta, "más allá de los reverses culturales, (las Farc) mostraron un crecimiento sistemático y un proceso de expansión en todo el territorio nacional" (Vargas, 2010). En consonancia, el inicio de los noventa implicó el recrudecimiento de la actividad armada luego de la realización de la quinta cumbre de la Coordinadora

Guerrillera Simón Bolívar en la que se acordó la realización de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública y la infraestructura económica del país (Echandía & Bechara, 2006).

Durante los años siguientes hubo un importante crecimiento de la guerrilla (como se evidenció en el capítulo anterior), que mantenía la iniciativa armada y procuró mayores enfrentamientos directos con las Fuerzas Armadas. Como lo señala el Informe de Paz del Observatorio de la Violencia (1997)

la guerrilla, que en el pasado operaba de manera preponderante en regiones rurales y aisladas, en la actualidad se acerca a los centros político administrativos más importantes del país y demuestra presencia muy activa en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos, fronterizas y con importante actividad agropecuaria. Es pues así como la nueva geografía del conflicto armado refleja con claridad como la guerrilla se extiende de manera cada vez más evidente hacia las zonas que le proporcionan ventaja estrategia a en la confrontación (Observatorio de la Violencia, 1997).

Se podría decir entonces que desde el punto de vista táctico militar, la guerrilla tuvo algunos éxitos en la concentración de un mayor número de fuerzas sobre objetivos específicos, lo cual creó una sensación de triunfalismo militar. De hecho las acciones de la guerrilla evidenciaron gran capacidad bélica, de financiamiento y de control sobre la población, todo lo cual tendría como fin último sostener sus posiciones en las zonas de presencia histórica, mientras en el resto del territorio realizan acciones para dispersar los esfuerzos el Ejército y por ello los ataques a constantes a bases policiales y de presencia militar. Por su parte, el Ejército parecía estar en una acción táctica defensiva, concentrada en cuidar instalaciones fijas sin una clara estrategia de ataque sobre las fuerzas irregulares (Vargas, 2010).

La encrucijada en la que se vio la institucionalidad por la amenaza de las Farc condujo a que en el 2000 los resultados del Tercer Informe del Grupo de Estudios sobre Estados Fallidos calificara a Colombia como una democracia parcial (The Fund for Peace, 2000). Las razones primarias esbozaban que en Colombia “no había podido contener el deterioro de sus indicadores de eficiencia y legitimidad” (Medellín, 2005).

Esta calificación situó a Colombia en una situación de riesgo con miras a convertirse en un Estado fallido¹. Como lo señala Angela Rettberg, los “Estados fallidos son Estados que presentan un desarrollo incompleto y deficiente de las instituciones básicas que conforman el Estado weberiano. No tienen el monopolio de la fuerza y no puede proveer servicios básicos a sus ciudadanos, desde la educación y salud hasta la protección de contratos y la formalización y tenencia de bienes y propiedades” (González & Rettberg, 2010).

Efectivamente dichas características se evidenciaban en el país. Este era el escenario en el que se encontraba el país a finales del siglo XX. Un Estado sin el monopolio de la fuerza, en disputa con grupos armados ilegales por la soberanía de los territorios nacionales, sin la suficiente capacidad para procurar los servicios esenciales para la población (educación, salud, entre otros) y con índices de corrupción altos que repercutían en la legitimidad de las instituciones.

De hecho los elementos mencionados, específicamente los referentes a la incapacidad de las instituciones estatales para procurar el bienestar del conjunto de la población de forma armónica, permitieron que al interior del territorio colombiano se fueran conformando entidades territoriales ‘independientes’ que estaban fuera del alcance del poder político legítimo. La debilidad de las instituciones que se encontraban

¹ Término popularizado desde inicios de los años 90’s para analizar a aquellos países vulnerables a conflictos armados internos.

en medio de un conflicto que absorbía de forma incomprensible los mayores esfuerzos políticos y financieros del Estado, permitieron que aquellos grupos ilegales pudieran disputar el control no sólo militar sino político y social de algunas regiones del país.

De esta forma, para la década de los 90's Colombia se enfrentaba a un problema de resquebrajamiento de soberanía ante los grupos armados ilegales, especialmente las Farc que actuaban constantemente para imponer un poder paralelo al del Estado (paraestado) y crear lo que Antonio Martínez (1995) denominó Fronteras Interiores.

Como se define en el libro *Fronteras Interiores: Una realidad ligada a la Seguridad y Defensa* – el cual fue base de las nuevas concepciones geopolíticas para Chile-, las fronteras interiores son aquellos espacios terrestres que, siendo parte del Estado, no tienen un desarrollo similar a la generalidad del país debido a que el alcance del gobierno central y sus políticas es restringido. De esta forma, las actividades humanas y económicas de dichos ‘enclaves’ se dificultan, y la poca interconexión entre la región y el núcleo central del Estado dan paso a la aparente conformación de un ente separado del resto de la población **Invalid source specified**.. En el caso de Colombia, las regiones más apartadas se encontraron en esta realidad por lo que el Estado carecía de cohesión interna.

Este era el escenario en el que se encontraba el país a finales del siglo XX. Un Estado sin el monopolio de la fuerza, en disputa con grupos armados ilegales por la soberanía de los territorios nacionales, sin la suficiente capacidad para procurar los servicios esenciales para la población (educación, salud, entre otros) y con índices de corrupción altos que repercutían en la legitimidad de las instituciones.

De hecho, los aspectos evaluados por The Fund Peace para la clasificación de los Estados incluían la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones colectivas (gobernanza), la capacidad del Estado para hacer que sus ciudadanos cumplan la ley, para contener los desplazamientos o para reducir la pobreza y la desigualdad. En este marco, Colombia registró los mayores índices de inestabilidad, un alto porcentaje de desplazamiento, desarrollo desigual y deslegitimación del Estado (Medellín, 2005).

Por lo tanto, aun en las conversaciones del Cagúan entre las Farc y el Gobierno de Andrés Pastrana, las cuales entre otras cosas dieron un avance estratégico a la guerrilla porque permitieron la oxigenación militar y el reentrenamiento de los combatientes en una zona libre de la presencia del Ejército, lo que si se veía necesario era un replanteamiento estratégico que permitiera readaptar el actuar de las FFMM frente a la tendencia de la guerra interna. Un actuar dirigido principalmente a recuperar el monopolio de la fuerza y consolidar la presencia institucional en todos los territorios del país.

Capítulo III.

Plan Colombia, *US aid package* e la IRA: Una Estrategia Efectiva para el Viraje de la Confrontación Armada a favor del Estado

Los últimos años de la década de 1990 definieron a Colombia como un país débil caracterizado por la incapacidad de las Fuerzas Militares para combatir eficientemente a los grupos al margen de la ley, la consecuente incapacidad institucional para mantener y garantizar el orden y la seguridad al interior del territorio y un problema de corrupción que socavaba la credibilidad en lo público y en la clase dirigente (Rojas, 2007). En este escenario llegó Andrés Pastrana (1998-2002) a la dirección política del Estado colombiano.

Durante los primeros momentos de Pastrana en el ejecutivo, se produjo la agudización del conflicto armado interno y la lucha contra los grupos insurgentes volvió a tomar fuerza como tema central de la agenda nacional. Así, como lo señala Alexandra Guáqueta,

la guerra erosionó la imperfecta soberanía empírica del país: debilitó la autoridad legítima de las instituciones estatales, frenó la construcción del tejido social y contrarrestó el desarrollo de la capacidad efectiva de gobernabilidad del Estado (Guaquetá, 2005).

Se retomó, entonces, el esfuerzo público por controlar y acabar las amenazas internas del flagelo armado y el narcotráfico que, en este punto, habían aumentado su intensidad y se convirtieron en el mayor problema de seguridad para el Estado y la democracia.

En este propósito, el Gobierno de Pastrana se identificó como un gobierno dual en el que, por un lado, se utilizaba la ‘zanahoria’ para mostrar su intención de alcanzar la paz con los grupos armados ilegales, y por el otro, se aplicaba el ‘garrote’ para debilitar por la vía armada a las guerrillas. Así, la estrategia para asumir este reto se desarrolló en dos frentes: El primero se enmarcó en la denominada ‘Diplomacia para la Paz’ con la que el Gobierno Pastrana inició una cruzada internacional de apoyo al proceso de negociación que se adelantaba con las Farc en la zona de distensión del Caguán.

Por otro lado, de la mano con los Estados Unidos se consolidó una política de línea dura que tuvo como producto el Plan Colombia, un instrumento de cooperación que tenía como objetivo el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, es decir, la Fuerza Pública, para continuar la avanzada militar del Estado y frenar el éxito de la estrategia insurgente.

Pese a su mención reiterativa en los escenarios políticos del país, entender el Plan Colombia amerita el análisis del proceso en el que esta estrategia fue dispuesta. Plan Colombia es la denominación que se le dio al paquete global de 7500 millones de dólares dirigidos a atender las necesidades internas de Colombia asociadas al conflicto interno y que incorpora los presupuestos de los diferentes Ministerios, créditos internacionales de distinta naturaleza, los programas de asistencia y los recursos de cooperación, sean estadounidenses, europeos, asiáticos o multilaterales (Ramirez, 2001).

En un primer momento el Plan Colombia tenía una connotación más social. Pero fue la vinculación de Estados Unidos lo que lo convirtió en una estrategia efectiva para el debilitamiento del Plan Estratégico de las Farc. Para llegar al “Plan para la paz, la

prosperidad y el reforzamiento del Estado (1999-2005)”, o Plan Colombia I, el Gobierno de Pastrana presentó 2 versiones anteriores de lo que su administración había contemplado iba a ser su ruta de trabajo en relación al manejo del flagelo doméstico. La primera formulación del Plan se dio en diciembre de 1998 como parte del Plan de Desarrollo Nacional que se presentó ante el Congreso de la República, y en esta versión el gobierno establecía que el eje central de la estrategia sería el crear las condiciones sociales, políticas y económicas para una paz integral, que estimulen la participación social (Ramirez, 2001).

En este primer intento, cinco fueron los campos de acción definidos por el gobierno: Desarrollo social y económico, atención humanitaria, fortalecimiento institucional, mejoramiento de la infraestructura y protección ambiental. En esta medida, el enfoque que Pastrana le imprimía a la estrategia para contrarrestar los factores del conflicto era un enfoque no militar que reconocía las causas objetivas y no objetivas de la violencia y que buscaba “pasar de un modelo tradicional de seguridad, basado en la represión policía-justicia-prisión, al desarrollo de intervenciones con un mayor contenido preventivo y pedagógico como estrategias para la disminución de la violencia” (Departamento Nacional de Planeación, 1998).

La segunda formulación del Plan se dio en junio de 1999 con una profundización de los aspectos de la primera versión y como parte de una política integral para la paz. Fue presentada ante el Grupo Consultivo de Apoyo al Proceso de Paz y ante el encuentro de mandatarios de Europa y América Latina de Río de Janeiro (Ramírez, 2001). Los factores articuladores en esta ocasión fueron la negociación, la reforma política y la estrategia de desarrollo para la paz, que se consolidaron en seis elementos incluidos en el documento expuesto al grupo consultivo de apoyo al proceso de paz: procesos productivos sostenibles, atención humanitaria, protección del capital humano,

desarrollo institucional y de capital social, infraestructura para la paz y promoción de la sostenibilidad ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 1998).

Finalmente, la tercera versión del Plan Colombia se presentó en septiembre de 1999 y sirvió como base para los textos que posteriormente se discutirían en los Estados Unidos como propuestas para Colombia. De hecho, a mediados de 1999 Colombia le solicitó a Estados Unidos ayuda militar para contrarrestar el avance de los grupos insurgentes y en respuesta, el Congreso norteamericano condicionó al Gobierno colombiano a la elaboración de un plan integral que contemplara soluciones a los problemas del país. El resultado de este proceso fue la modificación del plan y la consecuente aprobación en mayo del 2000 de la ayuda financiera estadounidense conocida como el *US aid package* que corresponde a los 1558 millones de dólares que aportaron los Estados Unidos para el Plan Colombia.

Mientras que las dos primeras versiones eran el eje articulador de una visión integral social, económica y política vinculados a la negociación y a la reforma política que había estipulado la administración Pastrana, la versión final se enfocó en la lucha antinarcóticos y a la modernización de las Fuerzas Militares (Ramirez, 2001). Una visión al *US aid package* así lo evidencia con la destinación de 60,3% de los recursos a Asistencia Militar, 14,3% Asistencia a la Policía Nacional, 7,96% a Desarrollo Alternativo, 5,92% para Derechos Humanos, 5,23% para Fortalecimiento a Instituciones y el 6,2% restante dividido entre ayuda a desplazados, reforma judicial y búsqueda de la paz (Ramirez, 2001).

La puesta en marcha del PC trajo consigo crítica al cambio de perspectiva. Este enfoque antinarcótico se fundamentó en la visión del Congreso estadounidense con relación al narcotráfico como amenaza a su seguridad nacional. La visión integral que

contenían las dos primeras versiones del Plan Colombia fue remplazada por una política enfocada en la disminución de la producción de coca y a su afectación social y política a Estados Unidos. Esto debido a que “el marco en el cual el territorio colombiano cumplía un papel dentro del negocio de coca cambió sustancialmente a partir de que la producción de hoja de coca se volvió el sustrato fundamental del negocio en Colombia, y llevó a la necesidad de cambiar la estrategia antidroga e involucrar al Ejército de manera mucho más directa para el control de las zonas de producción potencial de coca. Esa era la razón principal del Plan Colombia” (Pardo, 2006, pág. 383)

Sin embargo, sin el fortalecimiento del componente antinarcótico no se hubiera podido fortalecer el aparato estatal y las acciones con efectiva afectación contra la organización ilegal. La primera fase del Plan Colombia se llevó a cabo en el sur del país en los departamentos de Caquetá y Putumayo al ser en los que se concentraban la mayor extensión de cultivos de coca. La conocida como ‘Ofensiva en el sur de Colombia’ (1998-2002) “tuvo como objetivo primordial la erradicación de los cultivos ilícitos a través de las fumigaciones aéreas, fortaleciendo la presencia militar y de policía del Estado colombiano en una zona controlada por las Farc” (Duro, 2002).

A partir de la ‘Ofensiva del Sur’, el proceso de modernización del Ejército Nacional de Colombia y las demás instituciones de la Fuerza Pública fue consolidándose. Las Fuerzas Militares empezaron a modificar su visión en los ámbitos doctrinario, institucional y tecnológico en adición con

la adecuación de la doctrina militar a las realidades de la confrontación, la mayor efectividad en el planeamiento y conducción de las operaciones, la adopción de un concepto operacional proactivo, ofensivo y móvil, y el mejoramiento en inteligencia,

tecnología y las estructuras de comando, control y comunicaciones (Observatorio de DDHH y DIH, 2008, pág. 11).

Según Diana Rojas, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional –IEPRI-, la modernización de la Fuerza Pública se justificaba en la necesidad de hacer posible la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, particularmente en aquellas áreas controladas por la guerrilla, y de allí la creación de los batallones antinarcóticos (Rojas, 2007).

Los batallones antinarcóticos hicieron parte de la recién creada Brigada Antinarcóticos del Ejército con capacidad para 2900 efectivos que estarían operando inicialmente en el departamento del Putumayo. La Brigada Antinarcóticos fue uno de los avances más significativos del Plan Colombia y la incluida ayuda financiera de los Estados Unidos. Estos avances significativos condujeron a éxitos concretos en la lucha contra las drogas dentro de los que se resaltan: una reducción de la tendencia creciente en la producción de drogas ilícitas, la extradición de cerca de 500 miembros de organizaciones narcotraficantes, la extinción de dominio de más de 3000 bienes muebles e inmuebles parte del negocio ilegal, la fumigación de 710.52 hectáreas de siembra de coca y la erradicación manual de 93000 más, y la destrucción de 8900 laboratorios de producción de alcaloides (DNP, 2006).

De esta forma, gracias al Plan Colombia los nuevos elementos que hicieron parte de la actuación de las Fuerzas Armadas contribuyeron a un cambio significativo en la correlación de fuerzas con las Farc, al debilitar uno de los pilares fundamentales de su estrategia: el brazo financiero.

Por otro lado, los recursos del *US aid package* sirvieron para reforzar las acciones militares en el sur del país con la adquisición de 16 Black Hawks y 30 Hueys

para el Ejército, Inteligencia Militar y Comunicaciones, así como para los batallones de antinarcóticos recién implementados. También se beneficiaron las actividades de interdicción con nuevos sistemas de vigilancia y aviones OV10 para la Fuerza Aérea y pistas de aterrizaje, entre otros (Ramírez, 2001).

En este sentido, los progresos tecnológicos y doctrinarios sumados al golpe a las finanzas de la ilegalidad, fueron factores que permitieron que el Ejército empezara a retomar la iniciativa ofensiva contra las Farc y que se redefiniera el equilibrio estratégico a favor de las Fuerzas del Estado. El incremento en la movilidad con la conformación de las Fuerzas de Despliegue Rápido y las Brigadas Móviles y una mayor capacidad de trabajo conjunto entre los diferentes componentes de las Fuerzas Militares se consideraron elementos decisivos para la disposición de este nuevo escenario. Adicionalmente, el balance positivo que dejaba la ejecución del Plan Colombia

se presenta[ba] como resultado (...) de una mejora en la capacidad aérea para prestar apoyo de fuego en combate, así como para acompañar las operaciones de erradicación y movilizar provisiones y personal hacia y desde las áreas de difícil acceso terrestre o fluvial. También se reflejaría en el mejoramiento de la capacidad para realizar operaciones nocturnas, la implementación creciente de inteligencia técnica en las operaciones de fuerza pública y la unificación de sistemas de comunicación (Rojas, 2007, pág. 5).

Durante este lapso de tiempo (1991-2001), también se implementaron acciones relacionadas directamente al talento humano de las instituciones militares. Se dio una reforma de las Fuerzas Armadas con miras a la profesionalización y modernización de los miembros del Ejército y la Armada a través de procesos de reentrenamiento frecuentes, al mismo tiempo que se dio un sucesivo aumento del pie de fuerza de las instituciones. Como lo señala Rojas (2007), “el número de efectivos de la fuerza pública

pasó de 249833 en 1998 a 380069 en 2005, lo que representa un aumento del 52,1%” (Rojas, 2007).

Lo anterior permitió que en los años posteriores los esfuerzos de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas se enfocaran en el aumento de la capacidad disuasiva y de confrontación directa con los grupos armados ilegales (Vargas, 2009).

En conclusión, estos elementos de avance tecnológico y de mejora en el capital humano como puntos promovidos desde el Plan Colombia, permitieron seguir consolidando la ventaja estratégica del Estado a partir del fortalecimiento de sus Fuerzas Militares. Sin embargo, pese a sus avances, no se puede olvidar que en ese momento el Plan Colombia I tenía un fuerte componente antinarcótico que profundizaba la política de lucha contra las drogas aplicada en los últimos años en el país con apoyo del Gobierno de Estados Unidos (Colombia era el tercer receptor de cooperación estadounidense después de Egipto e Israel (Guaquetá, SF, pág. 210)). En este sentido, hubo una separación de los recursos del Plan destinados a contrarrestar el flagelo del narcotráfico y aquellos esfuerzos que iban para la lucha contrainsurgente, por lo que las acciones en este aspecto se veían limitadas.

Empero, con la llegada a la presidencia de Colombia de Álvaro Uribe, la utilidad de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos supondría un viraje importante, pues el fracaso de las negociaciones con las Farc en la Zona de Distención y la consiguiente denominación de la guerrilla como grupo terrorista, permitirían la alineación de la política de gobierno y de la ayuda estadounidense para Colombia con la lucha global contra el terrorismo que adelantaría la administración Bush (Rojas, 2007).

De hecho, como lo afirma Alejo Vargas (2010)

los hechos del 11 de septiembre de 2001 y las declaraciones reiteradas de funcionarios estadounidenses de distinto nivel enfatizando el carácter terrorista de las guerrillas y los paramilitares colombianos, y su estrecha vinculación con el narcotráfico, hacían prever que se avecinaban cambios en la política de Estados Unidos frente al conflicto armado en nuestro país (Vargas, 2010).

En efecto, el 11/9 desencadenó un cambio significativo en el discurso de política exterior de Estados Unidos porque se empezó a reconocer que la guerra contra las drogas no es separada de la guerra contra el terrorismo y, como tal, los aportes estadounidenses ya no podrían ser exclusivos para combatir el problema de las drogas ilícitas y las iniciativas que soportan los aportes al Plan Colombia también podrían ser usadas para la guerra contrainsurgente (Rustand, 2008).

En Colombia esta nueva visión también tuvo repercusiones. Oficialmente el flagelo del narcotráfico se integraba a la amenaza armada ilegal para desarrollar una estrategia integral ya no sólo de contención sino de negación (a los recursos financieros).

En este aspecto, de la nominación ‘narcoguerrilla’ que la lucha contra el narcotráfico le había dado a las Farc, cambió a ‘narcoterroristas’ para señalar una doble amenaza no sólo para Colombia sino para Estados Unidos que siempre había presentado el tráfico de estupefacientes como un desafío para su seguridad nacional. En respuesta a este nuevo hecho, el Gobierno de George W. Bush desarrolló la *Iniciativa Regional Andina –IRA-* con la que se regionaliza la lucha contra las drogas y con la que enmarcó el apoyo continuo al Gobierno colombiano dado a través del Plan Colombia.

Así, el Departamento de Estado articula en su justificación para el presupuesto de 2002 que la meta para los EEUU en Colombia es continuar la ayuda al Gobierno de Colombia en la eliminación de toda la cultivación ilícita y la infraestructura que sostiene la producción de las drogas ilícitas. Adicionalmente,

el aporte militar iba a mantener el equipo que fue enviado a Colombia bajo el PC además de ser utilizado para continuar el entrenamiento de las unidades militares colombianas, mientras que la contribución económica y social iba a ser distribuida entre los programas adecuados del PC; el 71% de la ayuda total fue destinada a las Fuerzas Armadas. La solicitud de la IRA de 2002 también incrementó la fuerza de mercenarios estadounidenses permitidos en Colombia según la figura del PC de 300 a 400, al mismo tiempo que disminuyó el número de consejeros militares estadounidenses admitidos bajo el PC de 500 a 400 (Rustand, 2008).

Hasta aquí se vislumbra, entonces, los principales elementos en la ejecución del Plan Colombia con la ayuda estadounidense y la ampliación de la cooperación norteamericana a la región a través de la Iniciativa Regional Andina. El apoyo de los Gobiernos de Estados Unidos desde inicio del 2000, supuso un impulso a la modernización y profesionalización de las Fuerzas Militares que tuvieron una avanzada significativa en contra de las Farc.

De esta forma, El Plan Colombia, convertido primeramente en una especie de política antidrogas, se estableció como un factor determinante no solo en la afectación de las finanzas de los grupos ilegales, sino también en la recuperación de la ventaja táctica y operacional del Estado en la confrontación con las Farc, al vincular los dos fenómenos que antes se trataban separadamente, mal gastando recursos y redoblando esfuerzos de forma ineficiente.

Capítulo IV

La consolidación de una Estrategia Aseritiva contra las Farc: El Plan Colombia II y Éxitos Operacionales de las Fuerzas Militares

Retomando las ideas expuestas hasta el momento, se afirma que el Plan Colombia y el posterior Plan IRA que promovió el Gobierno de George W. Bush, definitivamente produjeron un impacto negativo en el actuar militar de las Farc. Como se mencionó en el aparte anterior, la inclusión del terrorismo como elemento de análisis en el marco de las estrategias de seguridad, y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía a raíz del proceso de modernización que tuvo lugar desde finales de los años 90's, permitieron un cambio en la dinámica de la confrontación armada con los grupos armados ilegales.

El resultado más significativo: el retroceso estratégico de las Farc que ya no podían mantener acciones de control territorial, y un avance significativo del Estado a través de sus Fuerzas Militares para consolidar aquel control geográfico que la guerrilla había perdido. Este es el aspecto que se abordará en el presente capítulo.

Para empezar, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares se reforzó con el apoyo de efectivos estadounidenses que ayudaron a dirigir ataques contra la guerrilla. Se emplearon refinadas técnicas de rastreo electrónico y espionaje satelital, y se priorizaron los ataques aéreos sobre los terrestres. Si bien el hecho de que el Plan Colombia no solo conllevara la provisión de equipamiento militar a Colombia, sino también la presencia de personal del Ejército de EEUU sobre el terreno, provocó fuertes reacciones y advertencias (Shifter, 2010), como lo expone Stephen Randall (2004) “la efectividad de la Brigada dependería en gran medida de la calidad de información de inteligencia que se lograra obtener. Para lograr este objetivo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

trabajaron con las autoridades colombianas para crear un Centro de Inteligencia Conjunta, que estaría localizada en la Brigada Antinarcóticos” (Randall, 2004). Así, hubo un cambio en las tácticas de guerra que permitieron el ataque certero de las fuerzas del Estado contra los grupos ilegales que resintieron su estructura y forma de acción.

La presión ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado generó un repliegue de las estructuras guerrilleras, principalmente hacia las zonas de frontera. De hecho, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), las tensiones diplomáticas entre Colombia y sus vecinos permitieron que, en el nuevo clima de confrontación, la guerrilla extendiera su retaguardia estratégica hacia países como Venezuela y Ecuador (Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2009).

En este aspecto, como lo señala la Fundación Ideas para la Paz,

Colombia (acusó) a los gobiernos de los países vecinos de pasividad, aquiescencia e incluso apoyo directo a la presencia de las Farc en áreas de frontera, mientras que Ecuador particularmente, se (quejó) de las múltiples maneras en que el desborde del conflicto armado colombiano ha afectado su seguridad y soberanía (Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2009).

Por otro lado, no sólo se dio un repliegue del grupo ilegal de las zonas de control estratégico en las que se había logrado posicionar, sino que se evidenció un incremento progresivo de la deserción de los miembros de la organización. Según datos del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado -PAHD- (2009), entre 2002 y 2009 desactivaron 40 estructuras territoriales y cerca de 12700 integrantes abandonaron el combate y se acogieron al programa de desmovilización y reintegración ejecutado durante el Gobierno de Uribe (PAHD, 2009). Se resalta el hecho que alrededor de 1000

de los desmovilizados hacían parte de los mandos medio de las Farc y llevaban más de diez años en el grupo.

Otro aspecto que se resalta en la nueva configuración del flagelo interno, es la pérdida de cohesión de la organización. La efectividad y contundencia con la que las Fuerzas Militares han ejecutado las acciones contra las Farc, ha redundado en que la dirección de la misma haya perdido control sobre sus estructuras como resultado de la dispersión de las tropas en los territorios recuperados por el Ejército (Ortíz, 2009).

Para este resultado, la inteligencia militar jugó un papel sobresaliente. La nueva tecnología implementada y la formación de las agencias de inteligencia -siendo uno de los puntos de reforzó el Plan Colombia-, aumentaron la capacidad de interceptación de las instituciones de seguridad y conllevaron a una afectación de las comunicaciones radiales de las Farc y un contacto limitado y poco constante entre el secretariado y sus subalternos.

De esta forma, el aumento estructural de las operaciones exitosas de las FFAA contra las Farc durante el periodo comprendido entre 2002-2006, no sólo produjo un golpe desfavorable para las finanzas y la capacidad militar del grupo armado ilegal, sino que además condujo a la aparición de tensiones al interior de la organización por la disminución de la capacidad de mando y control. En consecuencia, como lo afirman Echandía y Bechara (2006), las acciones emprendidas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) situaron a la guerrilla en inferioridad militar con respecto al Estado y le quitaron la capacidad de iniciativa en la confrontación armada (Echandía & Bechara, 2006).

En este marco, el apoyo financiero del Plan Colombia en conjunto con la después formulada Política de Seguridad Democrática del ex presidente Álvaro Uribe -

la cual recogió el nuevo enfoque de lucha terrorista-, permitieron que las fuerzas de seguridad del Estado pusieran en práctica iniciativas dirigidas a recuperar el control estatal sobre territorios antes tutelados por las Farc. Un ejemplo de ello fue el Plan Patriota como iniciativa enfocada a golpear a los frentes que se encontraban asilados en el suroriente del país, a través de la disposición de 27000 efectivos de las FFMM en los departamentos de Caquetá, Guaviare y sur del Meta.

La puesta en marcha de este Plan para la recuperación de territorios importancia estratégica para la guerrilla, tuvo inicio en el año 2003 y permitió que se lograran controlar las vías de comunicación y las zonas urbanas de los departamentos involucrados (Caquetá, Guaviare y el Sur del Meta) (Semana, 2006). De igual forma, condujo a la destrucción de 906 campamentos, a la incautación de 1500 armas de largo y corto alcance, 442 guerrilleros muertos en combate –de los cuales 30 pertenecían a los mandos medios- y a un golpe a la logística y a la economía de guerra del Bloque Suroriental (Echandía & Bechara, 2006). Este avance militar del Estado “empujó a la guerrilla a instalarse en zonas remotas -áreas escarpadas, alturas superiores a los 3500 metros, selvas y zonas fronterizas- reduciendo dramáticamente el volumen de recursos que podría capturar así como la población bajo su control” (Ortíz, 2009, pág. 31)

Empero, ante su inferioridad militar, las Farc reorientaron sus líneas de acción y cambiaron su estrategia mediata y sus tácticas de combate para reducir su vulnerabilidad, y así propender por un cambio en distribución de poder. Si bien a finales de los años 90`s las Farc tenían como propósito esencial lograr control territorial que les permitiera mantener dominio sobre una zona y sobre su población, una vez avanzado el Plan Colombia y las iniciativas gubernamentales para el fortalecimiento militar del Estado, dicho objetivo tuvo que modificarse.

Ante las nuevas circunstancias, el propósito no era avanzar hacia la toma del poder a través del dominio de territorios, sino garantizar la propia supervivencia en un entorno hostil donde el Ejército y las demás Fuerzas combatían en superioridad. Por lo tanto, durante los primeros años de los 2000 la guerrilla decidió enfocarse en garantizar el control de posiciones estratégicas que les permitieran mantenerse vivos en el enfrentamiento armado y no sufrir una derrota militar contundente. Así, más que el control de la población, las acciones en determinados territorios como Tolima, Huila, Cauca y Putumayo, tuvieron como principal razón de ser el mantenimiento de las ventajas asociadas a las lógicas de guerra, las cuales se traducían en el control de corredores estratégicos, áreas con recursos económicos valiosos y zonas militares de avanzada y repliegue (Echandía & Bechara, 2006).

Bajo esta lógica, el marco de operaciones de las Farc tuvo un revés hacia la guerra de guerrillas que había tratado de dejar en la década de los 90. Al perder la iniciativa de la confrontación armada, la nueva ruta de trabajo era evitar el enfrentamiento directo con las Fuerzas Militares, al mismo tiempo que se realizaban acciones concretas dirigidas a desgastar al enemigo. Se retomaron tácticas como las emboscadas, los ataques sorpresivos, hostigamientos y los atentados a infraestructura y a poblaciones específicas con el ánimo de debilitar física y moralmente a las tropas estatales, mientras se multiplicaban los escenarios de confrontación y se camuflaban para evitar la identificación por parte del adversario.

Las tácticas de la organización ilegal tuvieron efectos en la correlación de fuerzas. Si bien estaban debilitadas en el ámbito armado, la superioridad de las FFAA no estaba logrando consolidar una victoria militar contundente que condujera a la terminación de la confrontación. En consecuencia, a principios de 2007 el Gobierno

nacional presentó la Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social (2007-2013) –EFDDS-, mejor conocido como Plan Colombia II.

En un escenario de recurrentes críticas al PCI como estrategia militarista que dejó de lado la inversión social, la nueva estrategia en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe Vélez buscó mostrar un fuerte énfasis en este aspecto. La iniciativa que enfatizó la corresponsabilidad de los fenómenos contra la seguridad y que contó con el apoyo del gobierno y el legislativo de los Estados Unidos como el principal cooperante externo de la estrategia, tuvo como objetivo central la consolidación de los logros del Plan Colombia I a partir de un aumento en la inversión social y el mantenimiento del apoyo a la actividad militar del Estado contra el narcotráfico y el terrorismo. Para esto, se fundamentó en un presupuesto de 43836,6 millones de dólares, de los cuales el 86% sería para apoyar los programas sociales del Estado que conformaría la nueva tendencia de consolidación y el 14% para los asuntos del ámbito militar.

Si bien el 14% parecería ser un porcentaje bajo con relación a la proporción dada a este rubro en la primera fase, lo cierto es que la cuantía no tuvo una mayor variación. De hecho, mientras en el Plan Colombia I se terminaron ejecutando 7410 millones de dólares en la lucha militar (Monsalve, 2007), el Plan Colombia II trajo consigo 6130 millones de dólares para el mismo propósito. Un hecho significativo dadas las condiciones iniciales disimiles del PCI al PCII, siendo este último formulado en un contexto en el que la amenaza guerrillera había sido mermada.

Como resultado de la perspectiva que desde el 2005 había integrado el problema del tráfico de drogas con el flagelo de los grupos armados al margen de la ley, la fase II del Plan Colombia consagró la fusión de la lucha antinarcóticos con la estrategia contrainsurgente traducida en la lucha contra el terrorismo. La parte de conflicto interno

se terminó ligando a la Política de Seguridad Democrática ejecutada por el Gobierno Uribe y la lucha contra el narcotráfico quedó consignada en la Política de Lucha contra las Drogas. De esta manera,

mientras en la primera se (hizo) énfasis en la consolidación del control territorial a través de la acción integrada del Estado en zonas diferenciados y clasificadas de acuerdo con el grado de debilitamiento o contención de los actores armados ilegales, en la modernización de la Fuerza Pública y en el aumento en el presupuesto de Seguridad y Defensa, la política antinarcóticos se (reafirmó) en el combate a todos los eslabones de la economía ilícita, a la necesidad de mayor flexibilidad para combatir simultáneamente el narcotráfico y el terrorismo, y de mantener el apoyo internacional a la lucha antinarcóticos” (Rojas, 2007).

Con relación a la parte militar dirigida a la atención del ahora denominado terrorismo, las acciones del gobierno permitieron el restablecimiento de la presencia de la Policía Nacional, la creación de soldados campesinos, el establecimiento de una red de cooperantes de la Fuerza Pública y la protección de la carreteras e infraestructura pública del país (Observatorio de DDHH y DIH, 2008). Como resultado directo, “la capacidad de combate (de las Fuerzas Militares) se incrementó en un 155% con respecto al periodo inmediatamente anterior y (...) la iniciativa de la Fuerza Pública (superó) en algo más del doble las acciones armadas de los grupos irregulares, que (registraron) una tendencia descendente” (Observatorio de DDHH y DIH, 2008).

De esta forma, la revitalización las Fuerzas Militares condujo a que las zonas más afectadas por la confrontación armada volvieran a ser ante todo rurales y a que la presencia de la guerrilla se apartara de los centros administrativos y principales polos de desarrollo del país (Observatorio de DDHH y DIH, 2008). Esto supuso un revés para la organización ilegal que desde la 7ª Conferencia Nacional Guerrillera había definido la

urbanización de su presencia como objetivo fundamental de su actuar, y en coherencia con esto desde la década inmediatamente anterior había registrado avances significativos en su propósito de cercar los centros políticos, económicos y administrativos más importantes del país (Observatorio de DDHH y DIH, 2008).

En este punto, el Estado sólo tendría que avanzar hacia una ofensiva militar contundente que permitiera el retroceso armado definitivo de la guerrilla. Ante la reacomodación de las acciones terroristas de las Farc hacia el desgaste de las instituciones militares, la Fuerza Pública debería aprovechar su ventaja en el plano aéreo y en la recién lograda tecnificación de la inteligencia militar. Las operaciones aeroterrestres que tendrían lugar entre 2008 y 2010 serían el medio para la consecución de este propósito.

El primer avance se dio en marzo de 2008 cuando aviones de la Fuerza Aérea Colombiana lanzaron un ataque aéreo contra un campamento de las Farc ubicado en la zona selvática de Angostura en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. Esta acción conocida como Operación Fénix, se desarrolló en conjunto con personal del Ejército Nacional, la Armada y la Policía y terminó con la baja de alias 'Raul Reyes', miembro del secretariado de las Farc y encargado del frente internacional de la organización y de otros 22 guerrilleros. En esta ocasión, las Fuerzas Militares pudieron romper el mito de la invencibilidad del secretariado del grupo ilegal y pudo revertir la avanzada política extranjera de los planes de acción.

Cuatro meses después del duro golpe propiciado a uno de los hombres más emblemáticos de la guerrilla, las Fuerzas Militares lograron liberar a 15 personas secuestradas por las Farc desde hacía más de siete años. Siendo una acción sin precedentes en la historia nacional y con gran impacto internacional, la Operación Jaque

supuso un gran éxito para el Estado al arrebatar de la tutela del grupo terrorista a Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos norteamericanos y 11 militares y policías, considerados por las Farc como elementos canjeables y de presión para el Gobierno colombiano.

En el 2010 tuvo lugar la Operación Camaleón en la que se liberaron 4 uniformados secuestrados, después de seis meses de planeación. Seguidamente, el 22 de septiembre del mismo año muere el cabecilla Luis Suárez Rojas, alias 'Mono joyoy', tras una incursión de las Fuerzas Militares en un Operación llamada Sodoma. Tras operaciones fallidas, bombardeos estratégicos, desembarcos de tropas, hallazgos de campamentos y combates con los anillos de seguridad, la Fuerza Aérea Colombiana logró bombardear el bunker en el que se encontraba.

De esta forma, se marcó un hito en la formulación de la doctrina militar moderna, actualizada para operaciones aeroterrestres en guerra irregular. Se ratificó la iniciativa estratégica de las Fuerzas Militares y se logró desestabilizar el plan estratégico, político y militar de las Farc, hasta el punto de tenerlos hoy sentados en la mesa de negociación con el Gobierno de Juan Manuel Santos. En comparación con El Caguán, la guerrilla debilitada, sin sus líderes históricos y con la sensación de no poder alcanzar el poder a través de las armas como se pudo pensar a finales de los 90. Por su parte, el Estado llega a la mesa fortalecido estratégica y militarmente.

Conclusiones

A lo largo del presente trabajo se ha querido mostrar como el Plan Colombia se analiza hoy en día como una estrategia efectiva que sirvió para contrarrestar el Plan Estratégico de las Farc para la toma del poder. Aunque en sus inicios no se visualizaba un entendimiento del conflicto doméstico, los paulatinos ataques a los pilares estructurales (militar y financiero) de las Farc conllevaron a un eventual debilitamiento de la organización.

En principio, el entendimiento del flagelo doméstico y la injerencia de los acontecimientos internacionales en plena Guerra Fría, condujeron a que el Estado asumiera una postura errónea para atender la amenaza que supuso la conformación de las Farc. Mientras la nueva guerrilla se acomodaba y acumulaba recursos con el propósito de atentar contra la institucionalidad legítima, las Fuerzas Militares entraron en una lógica de contención del enemigo comunista exportada desde la contienda bipolar. Esta poca comprensión del fenómeno armado naciente permitió que la organización criminal se fortaleciera a lo largo de los años y diseñara una estrategia coherente para el cumplimiento de su fin último: la toma del poder.

La estrategia más resaltante en este contexto es el Plan Estratégico para la Toma del Poder que las Farc desarrollaron desde la 7ª Conferencia Nacional Guerrillera. Con esta, definieron su estructura como ejército y desarrollaron las líneas de acción desde lo político y desde lo armado. Así se dio un punto trascendente en la existencia de las Farc, el cual representó un serio desafío para Colombia en los últimos años del siglo XX.

Como respuesta a la amenaza nacional e internacional que personificaban las Farc, el Gobierno de Colombia, en trabajo conjunto con las instancias políticas de los Estados Unidos, formularon el Plan Colombia que incluyó un importante aporte de

presupuesto estadounidense. Aunque el proceso para su definición fue largo y condujo a posteriores complementos que se iban adaptando a los cambios de escenario (Plan IRA, Plan Colombia II), lo cierto es que la ejecución del Plan Colombia logró contrarrestar el plan maestro de las Farc tanto en lo financiero como en lo militar al permitir, tal vez por primera vez, vincular el fenómeno del narcotráfico con el fenómeno armado ilegal y así entenderlo como una amenaza integral. El Estado recuperó su capacidad para actuar a lo largo del territorio nacional.

En primer lugar, aunque en su planteamiento inicial el Plan Colombia pretendía ser integral ante las necesidades derivadas de la condición de seguridad del Estado, el viraje posterior que asumió al convertirse en una política de línea antidrogas sirvió para atacar el frente financiero de las Farc, siendo un frente que se vislumbró desde la 7ª Conferencia Nacional Guerrillera como fundamental para el mantenimiento de la avanzada militar y política.

De esta forma, tras la ejecución del que se conoció como el Plan Colombia I (2002-2005 más un año adicional en el que se extendió el Plan hasta el 2006), la organización ilegal, considerada como el tercer cartel del narcotráfico, se vio expuesta a duros golpes contra su sistema de financiación. En pocos años, las Fuerzas Militares lograron desarticular la cadena de producción de los alucinógenos, que iba desde el cultivo hasta la producción y posterior distribución, y lo hicieron gracias a la nueva tecnología implementada en el desarrollo de operaciones militares.

En segundo lugar, aunque los recursos del Plan Colombia I estaban enfocados a la lucha contra el narcotráfico y poco se relacionaban directamente al flagelo entre el Estado y las Farc, los sucesos que tuvieron lugar al inicio de los años 2000 como lo fueron el fin de la Zona de Distención y la nueva cruzada contra el terrorismo tras los

atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, permitieron que se reforzaran las acciones dirigidas a combatir a la guerrilla.

La nueva connotación de las autodenominadas Farc como grupo terrorista implicó que el apoyo dado por los Estados Unidos, principal cooperante para la ejecución del Plan Colombia, aprobara destinar los recursos del plan –más específicamente del *Us aid packet*- a la lucha contra el terrorismo. De esta forma, los procesos de profesionalización de las Fuerzas Militares, de mejoramiento tecnológico y de tecnificación de inteligencia de las instituciones de seguridad, pudieron emplearse en ataques de ofensiva por parte de la Fuerza Pública hacia el grupo terrorista. En consecuencia, se dio una reconfiguración de la confrontación armada a partir de la recuperación de la ofensiva estratégica por parte de las FFMM.

En este sentido, las Farc debieron redefinir su estrategia y su método de actuación. De un avance a finales de los años 90, tuvieron que retroceder a la guerra de guerrillas y sufrieron un repliegue territorial. Ahora no podían ejercer control sobre poblaciones, sino que debían mantener corredores de importancia estratégica para su supervivencia. De esta forma, perdieron el control geográfico de zonas de avanzada y no pudieron trasladar el conflicto a los centros urbanos de relevancia administrativa y política para el Estado, como era su propósito inicial. Mientras tanto, las Fuerzas Militares lograron recuperar el control en aquellos territorios que habían estado custodiados por las Farc.

Adicionalmente, el fortalecimiento de la inteligencia militar desde la creación de la Brigada Antinarcóticos con el apoyo de efectivos estadounidenses y de la actuación conjunta entre las instituciones militares, permitieron diseñar acciones efectivas y contundentes contra blancos importantes de la guerrilla. Operaciones como Fénix,

Jaque, Camaleón y Sodoma demostraron la superioridad militar del Estado y acorralaron a las Farc hacia nuevas estrategias de salidas entre la que se destaca el proceso de negociación con el actual Gobierno de Juan Manuel Santos.

Recomendaciones

Definitivamente los últimos diez años han sido de vital importancia para la permanencia del Estado colombiano como se conoce hoy en día. El gran desafío que ha representado la presencia de las autodenominadas Farc en el contexto nacional es innegable, así como es innegable el hecho que el Estado ha aprendido a entender el fenómeno al qué se ha estado enfrentando durante los últimos 50 años.

No obstante, a lo largo de este tiempo también se ha aprendido sobre la capacidad de adaptación y mutación que muestran las Farc ante las adversidades que se les impone a partir de la ofensiva de la institucionalidad. En este aspecto, no hay que confiarse y asumir un aire de victoria soportado en el actual proceso de diálogos con la organización armada.

Si bien este trabajo mostró que en efecto hubo un viraje en el plano militar a favor de las fuerzas estatales, soportado también en la afectación financiera de la guerrilla como producto de la agresiva lucha contra el narcotráfico, lo cierto es que un ámbito que aún no se ha tratado lo suficiente y es el aspecto político de las Farc. De hecho, como se mostró en el Capítulo I de este escrito, el Plan Estratégico de las Farc se basa en 3 pilares esenciales, dentro de los que resalta el político que estaba en la tutela de grandes cabecillas como lo eran alias 'Alfonso Cano', alias 'Raúl Reyes' y el aún con vida alias 'Timochenko'.

Por lo mismo, no se puede considerar como algo menos importante que el plano militar y se deben diseñar estrategias tan coherentes y sólidas como lo fue el conjunto del Plan Colombia ante lo financiero y militar, ahora en el plano de acción político y social.

Referencias

- Borrero, A. (2006). Los militares: los dolores del crecimiento. En F. L. (Ed), *En la encrucijada: Colombia en el siglo XXI*. Bogotá: Norma.
- Departamento Nacional de Planeación. (1998). *Departamento Nacional de Planeación*.
Obtenido de
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND/Pastrana2_Desarrollo_%20Paz.pdf
- DeShazo, P., Primiani, T., & McLean, P. (2007). *Back from the brink. Evaluating progress in Colombia, 1999-2007*. Washington D.C. : Center of Estrategic and International Studies .
- DNP. (2006). *Departamento Nacional de Planeación*. Obtenido de
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Documentos_Publicaciones/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf
- Duncan, G. (2006). *Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá: Planeta.
- Duro, R. (2002). Plan Colombia o la paz narcótica . *Opera*, 87-116.
- Echandía, C., & Bechara, E. (2006). Conducta de la guerrilla durante el gobierno de Uribe Vélez: de las lógicas de control territorial a las lógicas de control estratégico. *Análisis Político*.
- Farc-EP. (11 de 03 de 2014). *farc-EP*. Obtenido de <http://farc-ep.co/wp-content/uploads/2013/10/Estatutos.pdf>

- González, F., & Rettberg, A. (2010). Pensando en la fragilidad estatal en Colombia. *Revista de Estudios Sociales*.
- Guaquetá, a. (SF). Transformación y efectos de la cooperación antidrogas entre Colombia y Estados Unidos (1970-2000). En Á. Camacho, *Narcotráfico: Europa, EEUU y América Latina* (págs. 185-224). OBREAL.
- Guaquetá, A. (2005). Colombia: seguridad y política exterior. En M. Ardila, D. Cardona, & S. Ramirez, *Colombia y su política exterior en el siglo XXI*. Bogotá: FESCOL.
- Kennan, G. (1947). The sources of soviet Conduct. *Foreign Affairs*.
- Martínez, A. (1995). *Fronteras Internas: Una realidad ligada a la seguridad y defensa*. Santiago de Chile: Academia Nacional de Estudios Estratégicos.
- Medellín, P. (14 de noviembre de 2005). El Estado Fallido. *El tiempo*.
- Monsalve, A. (2007). Plan Colombia II. *Periodico El Mundo*.
- Observatorio de DDHH y DIH. (2008). *Presidencia de la República*. Obtenido de <http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/agosto/11/impacto.pdf>
- Ortíz, R. D. (2006). La guerrilla mutante. En F. L. (Ed), *Colombia en la encrucijada*. Bogotá : Norma-Uniandes.
- Ortíz, R. (2009). *Woodrow Wilson Center for Scholars*. Obtenido de <http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Peace.Conflict.Spanish.pdf>
- Pardo, R. (2006). Urge un acuerdo de limitación de armamento. En S. Ramírez, & J. M. Córdoba, *Colombia-Venezuela. Retos de la convivencia* (págs. 382-384). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

- Patiño, C. A. (2010). *Guerra y construcción del Estado en Colombia: 1810-2010*. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
- Ramirez, S. (2001). La internacionalización del conflicto y de la paz en Colombia. En IEPRI, *El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto*. Bogotá: Planeta.
- Randall, S. (2004). El problema de la seguridad en las relaciones Colombia-Estados Unidos: perspectivas en transición . En D. Cardona, B. Labatut, S. Lavaux, & R. Sánchez, *Encrucijadas de la seguridad en Europa y las Américas* (págs. 245-272). Bogotá: CEPI.
- Rangel, A. (2003). Conflicto armado y terrorismo en Colombia. *Derecho Público*.
- Rodríguez, H. A. (2009). *Universidad Militar Nueva Granada*. Obtenido de <http://www.umng.edu.co/documents/63968/76129/RRelinter2009-2Ponencia.pdf>
- Rojas, D. M. (2007). Plan Colombia II: ¿más de lo mismo? *Colombia Internacional*.
- Rustand, F. (2008). *Universitetet i Oslo*. Obtenido de <https://www.duo.uio.no/handle/10852/25839>
- Sánchez, G. (2008). *Guerra política en la sociedad colombiana*. Bogotá: Nomos S.A.
- Sanín, F. G. (2004). Criminales y rebeldes: una discusión de la economía política del conflicto armado desde el caso colombiano. *Estudios Políticos*.
- Semana. (2006). *Semana.com*. Obtenido de <http://www.semana.com/online/articulo/plan-patriota/70525-3>
- Shifter, M. (2010). una década del Plan Colombia: por un nuevo enfoque . *Política Exterior* 136.

The Fund for Peace. (2000). *Tercer informe sobre Estados Fallidos*. Washington D.C. :

Grupo de Estudios sobre Estados Fallidos .

Vargas, A. (2010). *Las fuerzas armadas en el conflicto colombiano: antecedentes y perspectivas*. Medellín: La Carreta Editores E.U.

Vargas, A. (2009). Las Fuerzas Armadas colombianas frente a la tensiones fronterizas. En G. Jaramillo, *Construyendo puentes entre Colombia y Ecuador* (págs. 197-220). Quito: FLACSO.

Villamarín, L. A. (2011). Fénix, Jaque, Camaleón y Sodoma: operaciones tácticas con connotaciones político-estratégicas. *Military Review*.

Woodrow Wilson International Center for Scholars. (2009). *Wilson Center*. Obtenido de <http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Peace.Conflict.Spanish.pdf>



201003310

BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FF.MM.
"TOMAS RUEDA VARGAS"